



GD-F-008 V.9

Página 1 de 14

RESOLUCIÓN No. SSPD - 20174010005825 DEL 13/03/2017

“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015 y en la Resolución No. SSPD 20111300032265 de 2011,

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que el Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual “se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla según sea el caso, a los distritos y municipios del país.

Que el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, estableció que “La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007.”

Que la Superintendente de Servicios Públicos mediante Resolución No. SSPD 20111300032265 del 21 de octubre de 2011, delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con el Decreto 1077 de 2015; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el Municipio de SAN JUANITO del Departamento de META, es de categoría 6 y como fue prestador directo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2015, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 2.3.5.1.2.1.6. y 2.3.5.1.2.1.7. del Decreto 1077 de 2015.

Que contra la decisión de esta SSPD sobre el proceso de certificación, procede únicamente el recurso de reposición, el cual debe ser interpuesto dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo, tal como lo señala el artículo 76 del C.P.A.C.A., recurso que se resuelve en este acto administrativo.

Que mediante Resolución No. SSPD 20164010053865 del 30 de septiembre de 2016, la SSPD decidió DESCERTIFICAR al Municipio de SAN JUANITO del Departamento de META, por no haber cumplido el siguiente requisito previsto en los artículos 2.3.5.1.2.1.6. y 2.3.5.1.2.1.7. del Decreto 1077 de 2015:

- “Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complemento o sustituya.”



- "Cumplimiento del 50% de la obligación de reportar tarifas aplicadas, facturación y Plan Único de Cuentas PUC en el SUI, de la vigencia a certificar."
- "Reporte en el SUI del acta de concertación y materialización de los puntos de muestreo de la calidad del agua para el consumo humano."

El 1 de noviembre de 2016, el señor Ramiro Jiménez Segura, Alcalde Municipal de SAN JUANITO, compareció a esta SSPD a notificarse personalmente del contenido de la Resolución No. SSPD 20164010053865.

El Municipio de SAN JUANITO, mediante el documento radicado en esta entidad bajo el número SSPD 20165290756762 del 3 de noviembre de 2016, presentó oportunamente recurso de reposición contra la Resolución No. SSPD 20164010053865.

2. ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO Y PRUEBAS APORTADAS CON EL RECURSO DE REPOSICIÓN

2.1 Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

"II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

La certificación que adelanta la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en virtud de lo previsto en el parágrafo 1o del artículo 4º de la Ley 1176 de 2007, es el proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento, por parte de municipios y distritos, de los requisitos establecidos en los artículos 2.3.5.1.2.1.6 y 2.3.5.1.2.1.7 del Decreto Único Reglamentario N° 1077 de 2015 en desarrollo de los aspectos establecidos en el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007, y por el cual las entidades territoriales certificadas podrán continuar administrando los recursos del Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico [SGP-APBS] y asegurando la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

En relación con los medios para el reporte de la información requerida para el proceso de certificación que lleva a cabo la Superservicios, el artículo 2.3.5.1.2.1.11 del Decreto N° 1077 de 2015, establece lo siguiente:

Artículo 2.3.5.1.2.1.11. Reporte de información. Los municipios y distritos deberán reportar la información requerida para el proceso de certificación a través del Sistema Único de Información - SUI en los formularios y/o formatos que determine la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y la Contaduría General de la Nación en la categoría del Formulario Único Territorial - FUT, según corresponda.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio respecto de los requisitos establecidos para el aspecto "Destinación y giro de los recursos de la participación para Agua Potable y Saneamiento Básico, con el propósito de financiar actividades elegibles conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1176 de 2007" y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios respecto de todos los requisitos establecidos para el proceso de certificación, podrán dentro del marco de sus competencias y por cualquier medio, entre otras cosas, solicitar soportes adicionales para confrontar la información reportada al SUI y al FUT, con otras fuentes y decretar pruebas adicionales para comprobar la consistencia de la información suministrada.

Resulta de suma importancia precisar que conforme a lo previsto en el artículo 2.3.5.1.2.1.9 del Decreto N° 1077 de 2015, el plazo para reportar al Sistema Único de Información [SUI] administrado por la Superservicios, la información requerida por el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del mismo decreto dentro del proceso de certificación, es el 30 de abril de cada año.

Por su parte, el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto N° 1077 de 2015 establece unos requisitos generales para los municipios y distritos de todas las categorías los cuales se verificarán cada año, entre los cuales se encuentra el siguiente:

"Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados e la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complemento o sustituya (sic)

Dicho lo anterior, y abordando el análisis del caso concreto, se tiene que en la Resolución SSPD N° 20164010053865 del 30 de septiembre de 2016, la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo concluyó que el municipio de San Juanito aportó el Acuerdo Municipal N° 022 del 30 de noviembre de 2010 por el cual se establecieron los porcentajes o factores de subsidios y contribuciones, sin embargo este acuerdo fue expedido antes de la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011 y en consecuencia, estableció que el municipio no cumplió con el requisito (sic)

Al respecto debe señalarse que si bien es cierto el Acuerdo Municipal N° 022 del 30 de noviembre de 2010, fue expedido antes de la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011, también es cierto que los porcentajes de subsidios y aportes solidario o contribución que allí se establecieron resultan conformes con los porcentajes mínimos y máximos previstos en el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011.

Valga precisar, el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011 establece textualmente lo siguiente:

Artículo 125. Subsidios y contribuciones para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los subsidios en ningún caso serán superiores al setenta por ciento (70%) del costo del suministro para el estrato 1, cuarenta por ciento (40%) para el estrato 2 y quince por ciento (15%) para el estrato 3.

Los factores de aporte solidario para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a que hace referencia el artículo 2° de la Ley 632 de 2000 serán como mínimo los siguientes: Suscriptores Residenciales de estrato 5: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Residenciales de estrato 6: sesenta por ciento (60%); Suscriptores Comerciales: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Industriales: treinta por ciento (30%).

(...)

Parágrafo 1°. Los factores de subsidios y contribuciones aprobados por los respectivos Concejos Municipales tendrán una vigencia igual a cinco (5) años, no obstante estos factores podrán ser modificados antes del término citado, cuando varíen las condiciones para garantizar el equilibrio entre subsidios y contribuciones.

Luego, el Acuerdo Municipal N° 022 del 30 de noviembre de 2010 expedido por el Concejo Municipal de San Juanito, estableció los siguientes porcentajes:

SUBSIDIO

| Uso Residencial | Acueducto | Alcantarillado | Aseo |
|-----------------|-----------|----------------|------|
| Estrato 1 | 20 % | 20 % | 20 % |
| Estrato 2 | 10 % | 10 % | 10 % |

APORTE SOLIDARIO O CONTRIBUCIÓN

| Clase De Uso | Acueducto | Alcantarillado | Aseo |
|----------------|-----------|----------------|------|
| Uso Comercial | 50 % | 50 % | 50 % |
| Uso Industrial | 30 % | 30 % | 30 % |

Como se puede apreciar, los porcentajes establecidos en el Acuerdo Municipal N° 022 del 30 de noviembre de 2010 expedido por el Concejo Municipal de San Juanito, guardan coherencia con los criterios establecidos en el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011.

Ahora bien, el Concejo Municipal de San Juanito expidió el Acuerdo N° 010 de 2016, por medio del cual se establecieron los porcentajes y factores de subsidios y contribuciones para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, siendo de suma importancia precisar que para la expedición de este acto administrativo se tuvo en cuenta rigurosamente lo establecido en el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011.

En este orden de ideas debe recordarse que conforme a lo establecido en el segundo inciso del artículo 2.3.5.1.2.1.10 del Decreto N° 1077 de 2015, en el proceso que adelanta la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para certificar o descertificar a un municipio, se deben aplicar las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en cuanto a la actuación administrativa, notificaciones, pruebas y recursos (sic)

Así las cosas, el Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establecido mediante Ley 1437 de 2011, establece que "todas las autoridades deberá interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principio consagrados en la Constitución Política, en la Parte primera de este Código y en las leyes especiales".

El mismo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prevé que las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

// Para efectos del presente recurso, cobran especial relevancia los principios de igualdad y eficacia Para efectos del presente recurso, cobran especial relevancia los principios de igualdad y eficacia definidos en los numerales 2 y 11 del artículo 3° del CPACA, los cuales se citan textualmente a

continuación:

“En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta”.

“En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa”.

Ahora bien, los artículos 40 y 41 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo, establecen lo siguiente:

“Artículo 40. Pruebas. Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos especiales. Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos. El interesado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo. Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las pidió. Si son varios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales. Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil. Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla”.

En este orden de ideas, es claro que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se encuentra plenamente facultada para aplicar lo dispuesto en los artículo (sic) 40 y 41 del CPACA, en orden a solicitar información a los municipios con el propósito culminar (sic) adecuadamente la actuación administrativa prevista en la Ley 1176 de 2007 y en el Decreto N° 1077 de 2015.

Lo anterior en consideración a que la práctica de pruebas y requerimientos formales son figuras idóneas y ajustadas a derecho para obtener la información que resulte necesaria para culminar un proceso de certificación en virtud del principio de Eficacia, según el cual debe propenderse porque la actuación administrativa logre sus fines, y para tal fin deben removerse los obstáculos formales y tomarse las medidas pertinentes.

Ahora bien, una vez realizadas indagaciones en internet se encontró que en el año 2012 la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, ordenó la práctica de pruebas dentro de los procesos de certificación adelantados para once (11) municipios del Departamento del Huila, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, como se aprecia en el siguiente cuadro:

| MUNICIPIO | ACTO DE PRUEBA |
|--------------|----------------|
| AIPE | 20124010029876 |
| ALGECIRAS | 20124010029886 |
| BARAYA | 20124010029896 |
| GARZON | 20124010029906 |
| GUADALUPE | 20124010029916 |
| HOBO | 20124010029926 |
| LA ARGENTINA | 20104010029936 |
| NATAGA | 20124010029946 |
| RIVERA | 20124010029956 |
| SAN AGUSTIN | 20124010029966 |
| SANTA MARIA | 20124010029976 |
| TIMANA | 20124010029986 |

La anterior información fue obtenida de la página web de Aguas del Huila; a saber: <http://www.aguasdelhuila.gov.co/web/cms/ultimas-noticias/4-municipios-del-departamento-en-prueba-para-ser-o-no-certificados-en-el-manejo-de-recursos-del-sgp-programa-ap-sb>
Luego, en el proceso de certificación adelantado por la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo correspondiente a la vigencia 2015, se pudo establecer según información suministrada por agremiaciones de municipios, que en el mes de septiembre del año 2016 la

Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo le otorgó a la oportunidad a los municipios de Palestina (Huila), Pinchote (Huila) y Ciénaga (Boyacá), para que en respuesta a un acto que decreto (sic) la práctica de pruebas, aportaran nuevamente la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal, en al que conste (sic) que la estratificación aplicada durante la vigencia 2015 estuvo conforme a la metodología nacional establecida.

Adicionalmente, en el proceso de certificación adelantado por la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo correspondiente a la vigencia 2015, se le otorgó la oportunidad al municipio de Coper departamento de Boyacá, para que, en respuesta a un acto que decreto (sic) la práctica de pruebas, aportara el Acuerdo por medio del cual se establecieron los porcentajes y factores de subsidios y contribuciones para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en cumplimiento de lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994, para efectos del cumplimiento del requisito establecido en el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto N° 1077 de 2015.

Así las cosas, es claro que la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo no le dio un tratamiento igualitario al municipio de Cravo Norte (Arauca) en el procedimiento administrativo que ordena el parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, reglamentado por el Decreto N° 1077 de 2015, habida cuenta que durante los últimos años ha decretado la práctica de pruebas dentro de dicho procedimiento; y puntualmente en el año 2016 decretó la práctica de pruebas con el objeto de que varios municipios subsanaran la misma falencia presentada para el caso del municipio de Cravo Norte, consistente en que la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal no se mencionó o indicó la vigencia 2015, y para que un municipio aportara el Acuerdo Municipal por medio del cual se establecieron los porcentajes y factores de subsidios y contribuciones para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en cumplimiento de lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994 (sic).

Sobre el principio de igualdad establecido en el numeral 2° del artículo 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sección Tercera del Consejo de Estado en Auto del 4 de abril de 2013 - Expediente 2013-00019, realizó las siguientes disertaciones jurisprudenciales:

“Pues bien, ese cuestionamiento tiene su génesis en el principio de igualdad, el que se ha hecho operativo a través de un derecho, y a su vez, se ha subdividido en dos garantías a saber: igualdad ante la ley e igualdad de trato por parte de las autoridades. Esta última, impone un deber a todo el aparato estatal, que consiste en hacer material ese igual trato propugnado, y ello debe ser observado por todas las instituciones públicas en cumplimiento de sus deberes, y el órgano jurisdiccional no escapa de ello. Por lo tanto, en el ejercicio de la administración de justicia, debe observarse con sigilo la realización de este principio, y ello se materializa a la hora de proferir decisiones en conflictos jurídicos puestos a su consideración, en los que se tendrá a la Jurisprudencia, como eje clave para la resolución de esos asuntos, pues en la medida en que se presente una misma situación de hecho y de derecho, se acudirá a ella para darle solución en derecho y en justicia a los conflictos” (Subrayado fuera del texto).

Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencia C-836/01 se pronunció, en relación con el principio de igualdad como elemento de la seguridad jurídica, en los siguientes términos:

La igualdad, además de ser un principio vinculante para toda la actividad estatal, está consagrado en el artículo 13 de la Carta como derecho fundamental de las personas. Este derecho comprende dos garantías fundamentales: la igualdad ante la ley y la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades. Sin embargo, estas dos garantías operan conjuntamente en lo que respecta a la actividad judicial, pues los jueces interpretan la ley y como consecuencia materialmente inseparable de esta interpretación, atribuyen determinadas consecuencias jurídicas a las personas involucradas en el litigio. Por lo tanto, en lo que respecta a la actividad judicial, la igualdad de trato que las autoridades deben otorgar a las personas supone además una igualdad y en la interpretación en la aplicación de la ley.

(...)

La certeza que la comunidad jurídica tenga de que los jueces van a decidir los casos iguales de la misma forma es una garantía que se relaciona con el principio de la seguridad jurídica. La previsibilidad de las decisiones judiciales da certeza sobre el contenido material de los derechos y obligaciones de las personas, y la única forma en que se tiene dicha certeza es cuando se sabe que, en principio, los jueces han interpretado y van a seguir interpretando el ordenamiento de manera estable y consistente. Esta certeza hace posible a las personas actuar libremente, conforme a lo que la práctica judicial les permite inferir que es un comportamiento protegido por la ley. La falta de seguridad jurídica de una comunidad conduce a la anarquía y al desorden social, porque los ciudadanos no pueden conocer el contenido de sus derechos y de sus obligaciones. Si en virtud de su autonomía, cada juez tiene la posibilidad de interpretar y aplicar el texto de la ley de manera distinta, ello impide que las personas desarrollen libremente sus actividades, pues al actuar se encontrarían bajo la contingencia de estar contradiciendo una de las posibles interpretaciones de la ley”.

Por otra parte, la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo en la Resolución SSPD N° 20164010053865 del 30 de septiembre de 2016, concluyó que el municipio de San Juanito –

Meta, no cumplió con dos (2) de los requisitos establecidos en el artículo 2.3.5.1.2.1.7 del Decreto N° 1077 de 2015, cuando el municipio es prestador directo de los servicios públicos, así:

| ASPECTO | REQUISITO | FECHA DE CARGUE | INFORMACIÓN REPORTADA | RESULTADO |
|--|--|-------------------------------|---|-----------|
| Reporte de información al SUI, o el que haga sus veces, con la oportunidad y calidad que se determine. | Cumplimiento del 50% de la obligación de reportar tarifas aplicadas, facturación y Plan Único de Cuentas PUC en el SUI, de la vigencia a certificar. | Antes del 20 de mayo de 2016. | Reportó el 30% de los formatos de tarifas aplicadas, facturación y PUC de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, para la vigencia 2015. | NO CUMPLE |
| Cumplimiento de las normas de calidad del agua para el consumo humano, establecidas por el Gobierno Nacional | Reporte en el SUI del acta de concertación y materialización de los puntos de muestreo de la calidad del agua para el consumo humano. | 02 de mayo de 2016 | Reportó el Acta de concertación de puntos de muestro suscrita el 10 de mayo de 2012, no reportó el Acta de materialización de los puntos y lugares de muestreo concertados previamente. | NO CUMPLE |

Sobre el requisito consistente en que se debía reportar al Sistema Único de Información [SUI] el 50% de la información atinente a tarifas aplicadas, facturación y Plan Único de Cuentas [PUC], resulta de suma importancia precisar que la nueva y actual administración del municipio ha implementado un Plan de Choque que tiene previsto reportar mínimo el 50% de los formatos y formularios por medio de los cuales se debe cargar dicha información.

De otra parte, el municipio como prestador directo realizó la materialización y concertación de los puntos y lugares de muestreo de agua con la autoridad sanitaria competente, de lo cual se suscribió la respectiva acta, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución N° 0811 de 05 de 2008 proferida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Así las cosas se solicita que la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, tenga en cuenta que el municipio como prestador directo a realizado todas las gestiones y acciones necesarias para cumplir como prestador directo a (sic) realizado todas las gestiones y acciones necesarias para cumplir a cabalidad con los dos (2) requisitos del artículo 2.3.5.1.2.1.7 del Decreto N° 1077 de 2015 que fueron catalogados como incumplidos en la Resolución SSPD N° 20164010053865 del 30 de septiembre de 2016.

En este punto cobra especial relevancia señalar que conforme a lo establecido en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, en todo procedimiento administrativo o judicial es deber de las autoridades garantizar el debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial. En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha señalado que la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio no puede servir al propósito de hacer que las ritualidades procesales se conviertan en un fin en sí mismas, pues la prevalencia del derecho sustancial impone que los procedimientos sirvan como medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos de las partes y demás intervinientes en los procesos.

El alto tribunal de la jurisdicción constitucional en la Sentencia T-531 de 2010, precisó textualmente lo siguiente:

“La Corte ha estimado que “un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y, por esta vía sus actuaciones devienen en una denegación de justicia”, causada por la aplicación de disposiciones procesales opuestas a la vigencia de los derechos fundamentales, por la exigencia irreflexiva del cumplimiento de requisitos formales o por “un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas”. Tratándose de las pruebas, la Corporación ha indicado que, si bien los jueces gozan de libertad para valorarlas dentro del marco de la sana crítica, “no pueden desconocer la justicia material por un exceso ritual probatorio que se oponga a la prevalencia del derecho sustancial” y “que el sistema de libre apreciación es proporcional, mientras no sacrifique derechos constitucionales más importantes”. La Corte ha enfatizado que “el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta porque el juez no acata el mandato de dar prevalencia al derecho sustancial” y se configura “en íntima relación con problemas de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas (defecto fáctico), y con problemas sustanciales relacionados con la aplicación preferente de la Constitución cuando los requisitos legales amenazan la vigencia de los derechos constitucionales”. En el asunto que ahora ocupa la atención de esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, la argumentación que sirve de sustento a la decisión de aceptar el avalúo catastral, con el incremento legalmente previsto como base para efectuar el remate, y de no acceder a su revisión mediante la práctica de otro medio de prueba es de

orden estrictamente legal y se funda en artículo 516 del Código de Procedimiento Civil, que faculta al ejecutante para presentar el avalúo "en el término de diez días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o a la notificación del auto que ordena cumplir lo resuelto por el superior, o a la fecha en que quede consumado el secuestro, según el caso" y, de otro lado, señala que "tratándose de bienes, el valor será el del avalúo catastral del predio incrementado en un 50%, salvo que quien lo aporte considere que no es idóneo para establecer su precio real", caso en el cual "con el avalúo catastral deberá presentarse un dictamen obtenido por cualquiera de las formas obtenidas en el inciso segundo".

Por su parte, el Concejo de Estado en Sentencia proferida el 23 de octubre de 2008 realizó una apreciación jurisprudencial de importancia sobre el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal, a saber:

"La falta de impulso procesal del juez para adecuar la demanda a los rigores de ley o los pronunciamientos inhibitorios originados por la ausencia total del concepto de violación o por el defectuoso cumplimiento de tal requisito, no obstante la existencia de mecanismos legales que permiten ya fuere subsanando la demanda o acudiendo al cumplimiento de los deberes constitucionales que le imponen al funcionario judicial la obligación de darle primacía al derecho sustancial sobre las formas, a lo justo legal sobre el tecnicismo jurídico, terminan constituyéndose en actos denegatorios de justicia que no se compadecen con los dictados de rectitud procesal"

En este contexto es claro que el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se encuentra íntimamente ligado con el principio de eficacia consagrado en el artículo 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en consecuencia, todo funcionario público debe actuar siempre considerando que las formalidades no pueden entorpecer la consecución del objetivo perseguido por una norma sustancial. En estos casos se debe tener presente el espíritu de la ley, y por consiguiente, los contenidos de fondo deben prevalecer sobre las simples formalidades.

Valga precisar, el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal no puede ni debe llevar al incumplimiento de las obligaciones que establece la norma, pero tampoco se puede desconocer el principio cuando el objetivo del derecho sustancial se ha conseguido, en donde deben prevalecer los hechos de fondo.

III.- PRETENSIÓN DEL RECURSO

La pretensión del recurso de reposición, es que la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, reponga la Resolución SSPD N° 20164010053865 del 30/09/2016, y en tal virtud, **CERTIFIQUE** al municipio de San Juanito – Meta, en relación con la administración de los recursos del Sistema General de participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico SGP-APSB para la vigencia 2015, y para el aseguramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Para efectos de lo anterior, se solicita que se tenga en cuenta el Acuerdo Municipal N° 010 de 2016, fue expedido antes de la fecha de expedición de la Resolución SSPD N° 20164010053865, que los porcentajes y/o factores de subsidio y contribuciones establecidos en el Acuerdo N° 022 de 2010 guarda coherencia con los criterios establecidos en el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, y que el municipio adoptó las medidas y realizó las gestiones pertinentes para cumplir con los requisitos que le corresponden como prestador directo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

El sustento jurídico de la pretensión del recurso, está constituido básicamente por los artículos 2.3.5.1.2.1.10 y 2.3.5.1.2.1.11 del Decreto N° 1077 de 2015, por los principios de igualdad y eficacia consagrados en los numerales 2 y 11 del artículo 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011); y por los pronunciamientos jurisprudenciales citados en el presente documento sobre el deber que le compete a las autoridades garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal".

2.2. De las pruebas relacionadas en el recurso.

Con el documento radicado con el No. 20165290756762, por medio del cual se sustentó el recurso de reposición, se allegaron los siguientes documentos para que sean tenidos en cuenta como prueba:

2.2.1. Copia del Acuerdo Municipal No. 010 del 31 de mayo de 2016, por medio del cual se aprueban los porcentajes subsidios y factores de contribución.

2.2.2. Copia del acta de concertación de los puntos de muestreo con fecha del 29 de abril de 2016.

2.2.3. Copia de remisión de resultados del muestreo del análisis físico químico de la Secretaría de Salud al Municipio de San Juanito – Meta, con fecha del 6 de mayo de 2016.

2.2.4. Copia del acta final de actualización y recibo de puntos de muestreo con fecha del 29 de abril de 2016.

Los anteriores documentos, en su valor integral, se anexan al expediente.

3. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta SSPD procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

3.1. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el ***“Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados e la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya”***.

En cuanto al requisito del presente aparte, la Resolución No. SSPD 20164010053865 consideró que fue incumplido, toda vez que el municipio cargó el Acuerdo Municipal No. 022 del 30 de noviembre de 2010, el cual no se encontraba vigente en el año 2015 (vigencia a certificar), porque fue proferido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011.

El Acuerdo Municipal No. 022 del 30 de noviembre de 2010, fue expedido bajo la el régimen establecido por el Decreto 1013 de 2005 compilado por el Decreto 1077 del 2015, que en su artículo 2º consagra la metodología para fijar el equilibrio entre subsidios y contribuciones debe ser realizada anualmente, determinando así la vigencia de los acuerdos de aprobación de subsidios y contribuciones a un año. En el caso particular, la norma reportada por el Municipio de San Juanito al sistema el 20 de mayo de 2016 estuvo vigente solamente hasta el 30 de noviembre de 2011.

Solo a partir del 16 de junio de 2011, fecha de entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011, a este tipo de acuerdos se les dio una vigencia de 5 años, en concordancia con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 125 de dicha ley. Sin embargo esta norma no se aplica a los acuerdos expedidos con anterioridad al 16 de junio de 2011.

Ahora, el artículo 2.3.5.1.2.1. 6 del Decreto 1077 de 2015 explícitamente consagra que el acuerdo debe estar vigente en la vigencia a certificar:

“Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados e la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya” (subrayas fuera del texto original)

Y como ha sido explicado hasta el momento, el Acuerdo Municipal No. 022 de 2010 de San Juanito – Meta, solo estuvo vigente hasta el 30 de noviembre de 2011 y no rigió en el año objeto del proceso de certificación (esto es, el año 2015)¹.

Los argumentos del recurrente mencionan que el Acuerdo Municipal No. 022 del 30 de noviembre de 2010 está ajustado a la los porcentajes establecidos en el artículo 125 la Ley 1450 de 2011 y que actualmente tienen el Acuerdo Municipal No. 010 del 31 de mayo de 2016. Sin embargo, que la norma esté ajustada al artículo 125 de la citada ley, o que exista una nueva norma, no subsana la inconsistencia expresada por esta Superintendencia en la Resolución No. SSPD 20164010053865 sobre la vigencia de la norma en el tiempo, expuesto en este aparte. Por ello no le asiste la razón al recurrente y se confirma lo mencionado en dicha resolución respecto al incumplimiento de dicho requisito del artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015.

¹ Igualmente, la Corte Constitucional, sobre aplicación de la ley en el tiempo manifestó lo siguiente: *“Con fundamento en las normas constitucionales transcritas, puede afirmarse que en relación con los efectos de la ley en el tiempo la regla general es la irretroactividad, entendida como el fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia. Obviamente, si una situación jurídica se ha consolidado completamente bajo la ley antigua, no existe propiamente un conflicto de leyes, como tampoco se da el mismo cuando los hechos o situaciones que deben ser regulados se generan durante la vigencia de la ley nueva. La necesidad de establecer cuál es la ley que debe regir un determinado asunto, se presenta cuando un hecho tiene nacimiento bajo la ley antigua pero sus efectos o consecuencias se producen bajo la nueva, o cuando se realiza un hecho jurídico bajo la ley antigua, pero la ley nueva señala nuevas condiciones para el reconocimiento de sus efectos”* (subrayas fuera del texto original). Corte Constitucional. Sentencia C-619 de 2001. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra.

4.2. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el “Cumplimiento del 50% de la obligación de reportar tarifas aplicadas, facturación y Plan Único de Cuentas PUC en el SUI, de la vigencia a certificar”.

En cuanto al requisito de cumplimiento de la obligación del municipio como prestador directo de reportar el 50% de los formatos y formularios correspondientes a tarifas aplicadas, facturación y Plan Único de Cuentas en el SUI para cada servicio prestado, esta Superintendencia tuvo como no cumplido el requisito toda vez que se encontró que el cargue al 20 de mayo de 2016, fue del 30%.

Al respecto, el Decreto 1077 de 2015 en su artículo 2.3.5.1.2.1.7., dispuso como uno de los criterios adicionales que debían cumplir los municipios prestadores directos “a) Cumplimiento del 50% de la obligación de reportar tarifas aplicadas, la facturación y el PUC al SUI”.

Si se lee detenidamente el texto del citado criterio, se observa que el legislador estableció que los municipios debían reportar al SUI entre los formatos de tarifas aplicadas, facturación y PUC de los servicios que prestaban directamente los municipios y/o distritos, como mínimo el 50%; es decir, no hizo distinción alguna frente a qué porcentaje de cargue debía realizarse para cada uno de los formatos mencionados anteriormente, de ahí que dicho porcentaje se obtuviera de i) sumar los reportes certificados de los tres ítems (sin discriminar porcentajes entre ellos), ii) dividir dicha sumatoria entre la totalidad de los cargues que debía realizar el municipio, y, iii) multiplicar este resultado por 100, con el objeto de establecer si con el total arrojado de dicha operación matemática se cumplía con el porcentaje mínimo exigido en el citado Decreto.

En términos de fórmula, ésta sería así:

% =
$$\frac{\text{Formatos certificados}}{\text{Formatos habilitados que debía reportar}} \times 100$$


En este sentido y con la aclaración de la metodología utilizada para el estudio de este requisito, esta SSPD pasa a establecer si el Municipio de San Juanito, cargó en el SUI los formatos requeridos para la vigencia 2015, antes del 20 de mayo de 2016, encontrando lo siguiente:

Reporte Comercial Municipio San Juanito – Meta

| ID | Empresa | Servicio | Año | Formato | Estado | Fecha de Cargue |
|-------|----------------------------|----------|------|-------------------------------------|-----------|-----------------|
| 21772 | MUNICIPIO SAN JUANITO META | Aseo | 2015 | 2. Aplicación Tarifaria | Pendiente | |
| 21772 | MUNICIPIO SAN JUANITO META | Aseo | 2015 | 2. Aplicación Tarifaria | Pendiente | |
| 21772 | MUNICIPIO SAN JUANITO META | Aseo | 2015 | 2. Aplicación Tarifaria | Pendiente | |
| 21772 | MUNICIPIO SAN JUANITO META | Aseo | 2015 | 2. Aplicación Tarifaria | Pendiente | |
| 21772 | MUNICIPIO SAN JUANITO META | Aseo | 2015 | 2. Aplicación Tarifaria | Pendiente | |
| 21772 | MUNICIPIO SAN JUANITO META | Aseo | 2015 | 2. Aplicación Tarifaria | Pendiente | |
| 21772 | MUNICIPIO SAN JUANITO META | Aseo | 2015 | 2. Aplicación Tarifaria | Pendiente | |
| 21772 | MUNICIPIO SAN JUANITO META | Aseo | 2015 | 2. Aplicación Tarifaria | Pendiente | |
| 21772 | MUNICIPIO SAN JUANITO META | Aseo | 2015 | 2. Aplicación Tarifaria | Pendiente | |
| 21772 | MUNICIPIO SAN JUANITO META | Aseo | 2015 | 2. Aplicación Tarifaria | Pendiente | |
| 21772 | MUNICIPIO SAN JUANITO META | Aseo | 2015 | 2. Aplicación Tarifaria | Pendiente | |
| 21772 | MUNICIPIO SAN JUANITO META | Aseo | 2015 | 23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO | Pendiente | |
| 21772 | MUNICIPIO SAN JUANITO META | Aseo | 2015 | 23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO | Pendiente | |
| 21772 | MUNICIPIO SAN JUANITO META | Aseo | 2015 | 23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO | Pendiente | |
| 21772 | MUNICIPIO SAN JUANITO META | Aseo | 2015 | 23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO | Pendiente | |
| 21772 | MUNICIPIO SAN JUANITO META | Aseo | 2015 | 23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO | Pendiente | |
| 21772 | MUNICIPIO SAN JUANITO META | Aseo | 2015 | 23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO | Pendiente | |
| 21772 | MUNICIPIO SAN JUANITO META | Aseo | 2015 | 23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO | Pendiente | |
| 21772 | MUNICIPIO SAN JUANITO META | Aseo | 2015 | 23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO | Pendiente | |
| 21772 | MUNICIPIO SAN JUANITO META | Aseo | 2015 | 23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO | Pendiente | |
| 21772 | MUNICIPIO SAN JUANITO META | Aseo | 2015 | 23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO | Pendiente | |
| 21772 | MUNICIPIO SAN JUANITO META | Aseo | 2015 | 23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO | Pendiente | |

[illegible]

| ID | Empresa | Servicio | Año | Formato | Estado | Fecha de Cargue |
|-------|----------------------------|----------------|------|--|-------------|-----------------|
| | JUANITO META | | | ALCANTARILLADO | | |
| 21772 | MUNICIPIO SAN JUANITO META | Alcantarillado | 2015 | FORMATO TARIFAS APLICADAS ALCANTARILLADO | Certificado | 2016-05-20 |


Libertad y Orden

Sistema Unico de Información
de Servicios Públicos S.U.I.
República de Colombia

MUNICIPIO SAN JUANITO META

-21772- Listar información correspondiente al año: 2015

NO HAY DATOS DE ARCHIVOS VALIDADOS Y APROBADOS PARA ESTE AÑO

PERIODO. S- Semestral A- Anual

© 2008 - Copyright © S.U.I. Todos los derechos reservados

Con fundamento en lo señalado en precedencia, esta SSPD entra a calcular el porcentaje de cargue al SUI realizado por el Municipio de San Juanito:

$$\% = \frac{24 \text{ (formatos cargados de tarifas aplicadas, facturación y PUC)}}{80 \text{ (formatos que debía cargar de facturación, tarifas aplicadas y PUC)}} * 100 = 30\%$$

Como se puede apreciar, de los 80 formatos y formularios a reportar, el municipio solo reportó 24, incumpliendo así la obligación de los artículos 2.3.5.1.2.1.7, 2.3.5.1.2.1.9 y 2.3.5.1.2.1.11 del Decreto 1077 de 2016.

Toda vez que el mismo municipio no da una razón jurídica que justifique la falta de reporte (solo afirma que se encuentra implementando actualmente un plan de choque para el cargue de la información), se reitera lo mencionado en la Resolución No. SSPD 20164010053865 respecto al incumplimiento del requisito.

4.3. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el “Reporte en el SUI del acta de concertación y materialización de los puntos de muestreo de la calidad del agua para el consumo humano”.

Sobre el cumplimiento del requisito del reporte en el SUI del acta de concertación y materialización de los puntos de muestreo de la calidad del agua para el consumo humano, se consideró en la Resolución No. SSPD 20164010053865 como incumplido, toda vez que sólo reportó el día 2 de mayo de 2016 el acta de concertación de los puntos de muestreo, con fecha del 10 de mayo de 2012, más no se encontró el acta de materialización de los puntos de muestreo correspondientes.

El municipio en su recurso allega como prueba los documentos correspondientes al acta de concertación y al acta de materialización, ambas suscritas el 29 de abril de 2016, debidamente firmadas por el representante de la autoridad sanitaria y el representante del prestador de servicios públicos. Igualmente allega un oficio del Coordinador de la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, en la que se remite el análisis de laboratorio del agua para consumo humano.

Teniendo en cuenta que el ente territorial contaba con actas de materialización con anterioridad a la fecha límite de reporte legalmente establecido para evaluar la vigencia 2015, esto es el 20 de mayo de 2016, considera este Despacho que las actas allegadas cumplen con las exigencias del presente proceso de certificación, lo que le permite a esta Superintendencia, siguiendo los principios generales del derecho respecto de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, y el principio de eficacia administrativa señalado en el numeral 11° del artículo 3° del CPACA, proceder a ordenar el cumplimiento del requisito que se analiza.

4.4. Argumentos expuestos sobre la violación al Derecho a la Igualdad.

En su recurso de reposición, el ente territorial argumenta que con la actuación administrativa de la Superintendencia en el proceso de certificación de los recursos del Sistema General de Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico que culminó con la descertificación del municipio, se vulneró el derecho a la igualdad toda vez que no le fueron practicadas pruebas como si le fue realizado a unos municipios en 2012 y a 4 municipios en la presente vigencia (como se ve en lo transcrito de los argumentos del recurrente en la página 4 del presente oficio).

La aplicación del principio de la igualdad debe ceñirse a un análisis integral sobre la situación en concreto respecto de la cual se solicita su aplicación, y como consecuencia de ésta valoración, la SSPD determinará si dicho principio fue transgredido con su actuación administrativa.

Frente a la aplicación del principio de igualdad la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente:

“Etapas que comprende su análisis: Se debe definir y aplicar tres etapas: i) debe establecer cuál es el criterio de comparación (“patrón de igualdad” o “tertium comparationis”), pues antes de conocer si se trata de supuestos iguales o diferentes en primer lugar debe conocer si aquellos son susceptibles de comparación y si se comparan sujetos de la misma naturaleza; ii) debe definir si desde la perspectiva fáctica y jurídica existe tratamiento desigual entre iguales o igual entre disímiles y, iii) debe averiguar si el tratamiento distinto está constitucionalmente justificado, eso es, si las situaciones objeto de comparación, desde la Constitución, ameritan un trato diferente o deben ser tratadas en forma igual.”²

En el caso bajo análisis, el criterio de comparación que invoca el representante legal del municipio de San Juanito - Meta, sobre la apertura de pruebas, se debe señalar lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.3.5.1.2.1.11. Reporte de información. Los municipios y distritos deberán reportar la información requerida para el proceso de certificación a través del Sistema Único de Información - SUI en los formularios y/o formatos que determine la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y la Contaduría General de la Nación en la categoría del Formulario Único Territorial - FUT, según corresponda.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio respecto de los requisitos establecidos para el aspecto “Destinación y giro de los recursos de la participación para Agua Potable y Saneamiento Básico, con el propósito de financiar actividades elegibles conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1176 de 2007” y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios respecto de todos los requisitos establecidos para el proceso de certificación, podrán dentro del marco de sus competencias y por cualquier medio, entre otras cosas, solicitar soportes adicionales para confrontar la información reportada al SUI y al FUT, con otras fuentes y decretar pruebas adicionales para comprobar la consistencia de la información suministrada” (subrayas y negrilla propias).

A partir de la lectura del artículo 2.3.5.1.2.1.11. se resalta que la práctica de pruebas es potestativa de la entidad y solo cuando se requiera para confrontar la información reportada en SUI y al FUT.

Ahora bien, particularmente en el caso de San Juanito – Meta, no se consideró pertinente decretar pruebas debido a que los reportes e incumplimientos presentados en el caso particular, no admitían ser subsanados en su totalidad a partir de aclaraciones.

Igualmente es de señalar que al ente territorial se le mencionó en la Resolución No. SSPD 20154010039195 del 28 de septiembre de 2015, correspondiente a la vigencia 2014, que el Acuerdo Municipal No. 022 del 30 de noviembre de 2010, no cumplía con lo que solicita el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015. Por ello fue descertificado en la vigencia anterior y en la presente (aspecto que fue explicado en detalle en el aparte 4.1 del presente acto administrativo).

Siendo esta la situación, no se encuentra que al municipio se le haya dado un trato diferente en los términos transcritos anteriormente de la Sentencia C-862 del 3 de Septiembre de 2008, al no estar en igual situación que las entidades territoriales a los cuales les fue abierto periodo probatorio para aclarar lo cargado a tiempo en el proceso de certificación 2015.

4.5. Argumentos expuestos sobre la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal.

En cuanto al argumento del ente territorial que al descertificarlo de que se dio prevalencia a lo formal sobre lo sustancial, se recuerda que la Resolución No. 20164010053865 del 30 de septiembre de 2016 cumplió con los criterios de evaluación establecidos en los artículos 2.3.5.1.2.1.6 y 2.3.5.1.2.1.7 del Decreto 1077 de 2015. Así mismo esta SSPD se permite recordar que el Decreto 1077 de 2015, estableció requisitos de carácter formal para acreditar el cumplimiento de los requisitos tendientes a la certificación de los recursos del Sistema General de Participaciones, conforme a lo señalado en el artículo 2.3.5.1.2.1.9. de la citada disposición, que estableció que la información requerida debía ser reportada al SUI a más tardar el 30 de abril de 2015.

2 Corte Constitucional. Sentencia C-862 del 3 de Septiembre de 2008. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra.

Pues bien, partiendo de que la anterior es una norma procesal y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1564 de 2012, según el cual, *"Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley"*, y habiendo realizado el análisis bajo examen, se encontró que el municipio no cumplió con el lleno de los requisitos legales (ver apartes 4.1 y 4.2.)

Sobre el particular, la Corte Constitucional se ha pronunciado así³:

"Pues bien, nótese cómo las leyes de estirpe procesal son de orden público y en consecuencia de obligatoria observancia. Sus dictados entonces, son ajenos al querer de los individuos: particulares y funcionarios llamados a aplicarlas.", además advierte que: *"(...) En efecto, ha de repetirse, que la condición de normas taxativas que caracteriza las leyes que rigen los procedimientos es de inexorable acatamiento, máxime cuando estas normas constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del sistema normativo."* y concluye señalando: *"En este orden, los términos procesales se hacen tan imperativos que su cumplimiento, es una manifestación de uno de los principios sobre los cuales reposa el derecho procesal. Se trata del principio de la preclusión o de la eventualidad, el cual consiste en la clausura de las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de cada etapa del proceso."*

"(...)Lo anterior, por cuanto el señalamiento de términos judiciales con un alcance perentorio, no sólo preserva el principio de preclusión o eventualidad sino que, también, permite, en relación con las partes, asegurar la vigencia de los principios constitucionales de igualdad procesal y seguridad jurídica, ya que al imponerles a éstos la obligación de realizar los actos procesales en un determinado momento, so pena de que precluya su oportunidad, a más de garantizar una debida contradicción, a su vez, permite otorgar certeza sobre el momento en que se consolidará una situación jurídica."

Así las cosas, como sucedió en este caso, era indudable que no cumplir con lo señalado en los artículos 2.3.5.1.2.1.6, y 2.3.5.1.2.1.7 del Decreto 1077 de 2015 o el plazo del artículo 2.3.5.1.2.9 de la misma norma para reportar la información en el SUI, la única decisión viable que podía tomar esta SSPD consistía en descertificar al municipio de San Juanito – Meta.

Finalmente, se aclara que no es cierto así que, esta Superintendencia haya hecho prevalecer una forma procesal sobre el derecho sustancial, porque según lo señala el artículo 228 de la Constitución Política, el principio de la prevalencia del derecho sustancial constituye un imperativo dentro del ordenamiento jurídico, el cual no es excluyente de las normas procesales ni preferentes de las normas sustanciales.

Sobre este tema la Corte se pronunció y aclaró lo siguiente:

"(...) Si bien este principio constitucional adquiere una gran trascendencia y autoridad en todo el ordenamiento jurídico y especialmente en las actuaciones judiciales, ello no quiere decir que las normas adjetivas o de procedimiento carezcan de valor o significación. Hay una tendencia en este sentido, que pretende discutir la validez de las normas que establecen requisitos y formalidades, y que es preciso rechazar para poner las cosas en su punto, en estas materias constitucionales, y concluir entonces que, no obstante la aludida prevalencia, dichas normas cuentan también con firme fundamento constitucional y deben ser fielmente acatadas(...)"

En conclusión, se evidencia que el ente territorial no cumplió los requisitos relacionados con el reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario y el cumplimiento del 50% de la obligación de reportar tarifas aplicadas, facturación y Plan Único de Cuentas PUC en el SUI, y por lo tanto, el recurso formulado por el señor Ramiro Jiménez Segura, como representante legal del Municipio de SAN JUANITO, no prospera y en consecuencia la Resolución recurrida se confirma.

En mérito de lo expuesto, el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución No. SSPD 20164010053865 del 30 de septiembre de 2016, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

3 Corte Constitucional. Sentencia T - 213 del 28 de febrero 2008. Magistrado Ponente: Doctor Jaime Araújo Rentería

4 Corte Constitucional. Sentencia C-1512 del 8 de noviembre 2000. MP Alvaro Tafur Galvis

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución al alcalde del Municipio de SAN JUANITO del Departamento de META, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR, una vez en firme, el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento de META, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y publicar en la página web de la SSPD.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.



JULIÁN DANIEL LÓPEZ MURCIA

Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Vanessa Benavides- Contratista Grupo de Certificaciones e Información

Revisó: Carlos Andrés Bernal Casas – Abogado Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Expediente: 2016401351600363E